

Los mismos con las mismas

15

Le dicen que lo están buscando, le piden que se esconda. En la mañana del 21 de febrero de 2005, Luis Eduardo decide no huir de la violencia que lo ha acompañado desde que nació hace treinta y cinco años. No quiere dejar a su nueva compañera Bellanira ni a Deiner, su hijo de once años que cojea desde agosto pasado a causa de la explosión de una granada abandonada por el ejército. Es uno de los líderes más reconocidos de San José de Apartadó. Quizá se siente protegido por la solidaridad recibida en Estados Unidos y en varios países. Tal vez no se imagina que quieran matarlo. Se equivoca. Luis Eduardo, Bellanira y Deiner son interceptados cerca del río Mulatos, llevados a la playa, descuartizados a machete y decapitados. Cerca, otro grupo entra disparando a la casa de Alfonso Bolívar, miembro de la Comunidad de Paz de su pueblo. El hombre logra escapar. Escapa también un campesino de nombre Alejandro que pasaba en ese momento por el camino cercano: una bala le da en la espalda, es alcanzado y asesinado. Alfonso habría podido salvarse, pero cuando oye los gritos de su mujer, Sandra Milena, que pide piedad para sus hijos, se devuelve a morir con su familia. Los machetes se ensañan en su cuerpo y en el de Sandra. Tampoco hay piedad para Natalia de cuatro años ni para Santiago de sólo 18 meses. Los testigos de las dos masacres: el hermano medio de Luis Eduardo y un vecino de Alfonso cuentan una verdad espantosa: esta vez los victimarios no son de las Autodefensas Unidas, los principales protagonistas de veinte años de desangre colombiano, sino los militares del Batallón 33° de contraguerrilla del ejército. Desde hace cuatro días toda la re-

gión es sobrevolada por helicópteros y aviones bombarderos, y ocupada por efectivos de la Brigada XVII con sede en la base de Carepa. Es la respuesta a la emboscada de hace una semana en el Valle de la Llorona por parte del V frente de las Farc, que costó la vida a dieciséis soldados. Como otras veces, son civiles indefensos las víctimas a sacrificar en represalia. “En los tiempos más duros de la guerra sucia ocurría con frecuencia que, tras un ataque de las Farc al Ejército, a los pocos días se perpetrara una masacre”, recuerda un analista en la revista *Cambio* 16.

Desde cuando, en 1997, los desplazados de San José de Apartadó se proclamaron Comunidad de Paz, negándose a colaborar con cualquier actor armado, incluido el ejército, muchos generales los consideran apoyo de los rebeldes. El mismo presidente Álvaro Uribe, en el curso de una cumbre en mayo pasado en la vecina Apartadó, sostuvo que San José era realmente un corredor usado por las Farc. Indolente frente a las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Constitucional colombiana que en varias ocasiones, han conminado al Estado colombiano a “otorgar un tratamiento de especial cuidado y protección” a la Comunidad de San José, Uribe ordenó a la policía arrestar, si fuere necesario, a sus dirigentes y a deportar a los voluntarios que los protegen, primero que todo a los miembros de las Brigadas Internacionales de Paz.

Cuando en San José se sabe de la masacre, aparecen el clamor a parar la carnicería y los llamados a las organizaciones humanitarias de Colombia y el mundo. Para recuperar los cuerpos de las víctimas se organiza una expedición de cien personas, acompañada de sacerdotes, cooperantes internacionales y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. La comitiva se dirige a Mulatos, a la finca de Alfonso, repleta de vecinos que esperan la llegada de los funcionarios judiciales. Es el 25 de febrero. Al día siguiente los chulos que vuelan en círculos concéntricos los guían para descubrir los cadáveres destrozados de Luis Eduardo y los suyos. En la zona aún se mueven grupos de soldados. A diferencia de otras veces, su comportamiento es descarado. Hay el que, ironizando sobre el hedor que satura el ambiente, sostiene que “eso huele a puro guerrillero muerto”. Otro acusa al grupo de estar allí por órdenes de las Farc. Se toman fotos y se amenaza a los campesinos. La actitud de los militares equivale a una reivindicación.

Obviamente son de otro tono las respuestas que las autoridades dan públicamente a Gloria Cuartas, a los abogados de la Corporación Jurídica Libertad y al padre jesuita Javier Giraldo que denuncian la responsabilidad de la XVII Brigada en la masacre: mientras que el comandante del ejército, Reynaldo Castellanos, define estas acusaciones como “temera-

rias”, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, asegura que “la Fuerza Pública está tranquila porque no fue ella la que cometió este crimen”. Para parar las protestas indignadas que llueven de todo el mundo, el gobierno de Bogotá comienza la habitual contraofensiva orquestada por el vicepresidente Francisco Santos, entrenado para representar en el equipo de Uribe el papel del más patético defensor de oficio. Aparece un supuesto reinsertado de las FARC, que cuenta la increíble historia de que Luis Eduardo lo habría llamado por teléfono pidiéndole ayuda porque quería desmovilizarse dejando la comunidad de San José (utilizada “como sitio de descanso y veraneo”, según el director Seccional de Fiscalías de Antioquia). Supuestamente esa conversación habría sido escuchada por la guerrilla y esa sería la causa de su muerte. La absurda tesis es retomada por los medios de comunicación.

El 2 de marzo llega a la zona una comisión judicial que se estrella contra un muro de silencio: nadie quiere hablar con los jueces. Ni siquiera Gloria Cuartas quiere declarar: “la experiencia demuestra que durante ocho años de denuncias siempre se buscó el testimonio de la víctima pero nunca el de los victimarios. Y en todas las denuncias que hicimos siempre fueron amenazados o asesinados quienes llegaron a presentar sus declaraciones”, recuerda. Desde la posesión de Uribe, hablar de justicia en Colombia es un eufemismo. Sometida a amenazas y limpia de casi todos los elementos honestos, la magistratura continúa secundando la hermandad entre la cúpula del ejército y el núcleo central de las AUC. En Urabá es peor. Además de intimidar a los testigos o de acumular inútilmente sus denuncias, a menudo los jueces dejan filtrar su identificación para que los asesinos estatales y paraestatales los callen para siempre. Desde 1997, de los dos mil habitantes de San José, han sido asesinados 165; una veintena por parte de las Farc y el ELN, y el resto por parte de militares y paramilitares. En el centro del pueblo se levanta un monumento de piedra con los nombres de las víctimas. Detrás de la fila de casas crece el cementerio.

Mientras desde Bogotá Uribe grita que “ningún centímetro del territorio” debe estar vedado a las Fuerzas Militares, su vicepresidente, Francisco Santos, afirma que “las comunidades de paz no son, ni pueden ser Estados independientes”.

Si su declaración recuerda las proclamas de Álvaro Gómez Hurtado hace medio siglo contra la “república independiente” de Marquetalia, la responsabilidad militar de la masacre de Mulatos –también por la barbarie que no ha respetado ni a los niños– representa un mensaje escalofriante para el país: con la desmovilización de los paramilitares, el “trabajo sucio” que les fue encomendado durante años vuelve a ser tomado por el ejército regular. No basta que el general Reynaldo Castellanos asegure que

“no somos unos criminales” para negar una realidad evidente en Mulatos, como en muchos casos recientes; por ejemplo en Arauca, o en el Cauca, en Totoró donde un bus que transportaba niños fue tiroteado por los militares, o en Tacueyó, donde un capitán del Ejército, después de una emboscada guerrillera disparó en la plaza llena de gente, gritando a los presentes “guerrilleros”.¹

Después de la masacre de Mulatos, el Defensor del Pueblo, Wólmar Pérez, pide a las autodefensas que le digan al país si los responsables de estos crímenes pertenecen a esa colectividad. La pregunta es un pleonasmo ridículo que sabe no merecer otra respuesta que una carcajada desde las cercanas montañas de Ralito. Entre septiembre de 2002 (cuando comenzaron las conversaciones oficiales con el gobierno Uribe y proclamaron el cese de hostilidades) y septiembre de 2004, según la Coordinación Colombia-Europa-EU (que asocia a 130 ONG) los miembros de las AUC han asesinado a 1899 personas² con total impunidad, garantizada como siempre por militares y jueces, y, en una ocasión, hasta reivindicada por el mismo Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que en una conversación con los jefes de las AUC en Santa Fe de Ralito, hecha pública en septiembre de 2004 por la revista *Semana*, afirmó que el gobierno ha “manejado con el mayor cuidado para evitar un escándalo público” varios asesinatos de los paramilitares en los alrededores. La revelación de un comportamiento que en un país normal hubiera sido judicializado como complicidad en homicidio, fue desestimada tranquilamente como un “pequeño pleito” por el mismo Restrepo.

La masacre de Mulatos significa mucho más. Recuerda, por ejemplo, el nexo entre la violencia y el “progreso económico”. Como sugiere Alfredo Molano, detrás del terror y del anunciado plan de desalojo de las comunidades de paz de Urabá y del Chocó, comenzando por San José, está la sustitución de los bosques naturales por plantaciones de palma africana, que producirán un desastre ambiental, cultural y social incalculable en la región, y asegurarán enormes ganancias a las multinacionales palmeras tuteladas por los gobiernos de Bogotá y defendidas a sangre y fuego por militares y paramilitares.³

1. Sobre la masacre de Mulatos véase *El Tiempo*, *El Espectador*, *Cambio*, comunicados de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la Corporación Jurídica Libertad, de la agencia Prensa Rural y de Brigadas Internacionales de Paz, Colombia.

2. *El Espectador*, 26 de febrero de 2005.

3. *El Espectador*, 13 de marzo de 2005.

La anunciada aniquilación de las comunidades de paz es además una etapa simbólica e importante del proyecto de Álvaro Uribe de reclutar al pueblo para la guerra contra la subversión: nadie puede ser neutral y todos son útiles, comenzando por los paramilitares reciclados. En febrero de 2005, cuando Uribe propone una alianza entre el sector privado y la fuerza pública en contra de la guerrilla, reaparece el fantasma de las Convivir. El jefe paramilitar Jorge 40 afirma la necesidad de un “empalme” entre los comandantes de las AUC y los oficiales del Ejército Nacional con el propósito de “evitar baches que posibiliten el regreso de las guerrillas a las poblaciones y áreas que han vivido los últimos años libres de su presencia”. La propuesta tiene el apoyo de la Federación de Ganaderos en varios departamentos: “La idea es que cada finca acoja a uno o varios miembros desmovilizados de las autodefensas para conformar una red de comunicaciones y de cooperantes, y así ayudar a las Fuerzas Militares en su lucha contra la subversión”. Como señala Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, está dibujada la “reingeniería del paramilitarismo”. Los periódicos aplauden subrayando que “los grupos paramilitares, de una u otra forma, ayudaron a controlar el embate de la insurgencia”.⁴ El hecho de que “una u otra forma” contemple sobre todo la eliminación salvaje de civiles mediante masacres, homicidios y desapariciones, no representa un problema: evidentemente “el fin justifica los medios”, todos.

Para que el Estado colombiano pueda incorporar a los paras en su estructura es necesaria una ley que borre su pasado criminal. Los máximos jefes, que recuerdan este pasado, han resuelto el problema: desde Carlos Castaño, desaparecido en circunstancias oscuras en abril de 2004, hasta Salvatore Mancuso que, desmovilizándose en diciembre del mismo año después de su aparición como triunfador en el Congreso en julio, se ganó el reconocimiento de *El Tiempo* que definió como “un gesto valeroso” su pedido de perdón al país. Queda el problema del contenido de la ley que ha pasado de llamarse “de alternatividad penal”, al más impactante “de paz y justicia”. Un problema complicado: parece difícil que Uribe pueda respetar las generosas promesas hechas en su tiempo a las AUC, concretándolas en un marco jurídico que no ofenda el sentido común, además de las leyes colombianas e internacionales. Una dificultad generada por la particularidad de una negociación sui géneris. Como lo explica muy bien Javier Giraldo, entre el Estado y las AUC no hay una negociación política debido a la ausencia de diferencias importantes entre los dos. Ambos tienen el

4. *El Espectador*, 7 de marzo de 2005.

mismo enemigo, un mismo modelo social que defender, la misma doctrina llamada de “seguridad nacional”, unas mismas prácticas represivas, una solidaridad de cuerpo, unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas alternativas, así como la coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales con el fin de que sirvan a la causa de aniquilar dichos movimientos. “La paz se negocia solamente entre enemigos y jamás entre amigos”, repite Giraldo recordando cómo la supuesta persecución estatal a los paras ha sido orientada contra los grupos disidentes cuando no se han “dado de baja” elementos de bajo rango o humildes campesinos o pobladores cuyos cadáveres se hacen aparecer como de paramilitares.⁵

En este diálogo “entre socios de la guerra sucia”, como lo ha definido Antonio Caballero, que no garantiza ni la desmovilización ni el desmonte del paramilitarismo, y tampoco verdad, justicia y reparación para las víctimas, el gobierno colombiano, más que como interlocutor, actúa como el abogado defensor, el relacionista público, el asesor cuando no el cómplice de las AUC. El cinismo de Uribe es tan grande que quiere pintar de “político”, para perdonarlo, hasta el delito de narcotráfico, considerado por Estados Unidos, por lo menos en Colombia, el más grave de los crímenes de lesa humanidad. Todo para asegurar un futuro “democrático” a los paramilitares que ya han anunciado que se lanzarán a la política como Alianza por la Unidad de Colombia, nombre pensado para mantener la sigla AUC.

No importan las alarmas lanzadas por el mismo diario *El Tiempo*, que en una edición dominical habla de una realidad abrumadora: “Colombia se ha paramilitarizado”. El periódico, que en los años ochenta fue fundamental en el nacimiento del fenómeno, afirma que “hoy el país está constatando que, luego de una ofensiva que involucró los peores crímenes, una porción sustancial del territorio, de la vida diaria de millones de personas, de la política, la economía y de los presupuestos locales, y una cantidad desconocida de poder e influencia al nivel de instituciones centrales como el Congreso está en manos paramilitares”. Según la ONG Codhes, únicamente entre 1997 y 2003 los paras se han quedado con 5 millones de hectáreas de tierras usurpadas a los que engrosan el ejército de tres millones de desplazados. Analizando el modelo de avance de las autodefensas desde mediados de los años noventa, ejecutado de modo idéntico en casi todas las zonas a donde se propusieron llegar, *El Tiempo* afirma

5.

El artículo de Giraldo está en el sitio www.javiergiraldo.org

que, en la última fase, la de dominación real de un territorio, “los índices de criminalidad bajan, la oposición prácticamente no existe y se consolida un proyecto político y social”.⁶

“La paz del desierto” parece gustarle a los países del “mundo civilizado”, del que forma parte Europa, que desde hace años la financia con su melosa hipocresía. Y le gusta a la oligarquía colombiana: durante el 2004 las grandes empresas incrementaron sus ganancias un 44%.⁷ En Colombia se repite que “el país va mal, pero la economía va bien”. Lo mismo de siempre. ¿Hasta cuándo?

* * *

Muchos juzgarán estas páginas amargas, lúgubres y sin esperanza. Puede ser que los colombianos sobre todo tengan esta sensación. Ellos, que han aprendido a convivir desde siempre con una realidad de violencia, y que siguen descubriendo quién sabe dónde una alegría que enamora a los extranjeros que pasan por su país, tienen razón. Aunque por definición no debería, este ensayo no propone remedios.

La razón es banal: no los veo. Son miserables y trágicos los efectos de las recetas agresivas como la de Uribe, sustancialmente similar a aquellas aplicadas por los que, por décadas, se han sucedido en la dirección del Estado colombiano. Mientras se oyen soluciones no practicables, los guerreros colombianos se han contagiado de barbarie demostrando, en diferente medida unos y otros, un profundo desprecio por la vida humana. Los oligarcas, con su corte de vasallos, lo mismo que el imperio estadounidense y sus aliados europeos son cínicos e hipócritas. Nadie quiere parar la rapiña a la cual se han acostumbrado en el paraíso colombiano. Todos, de una manera u otra, se unen para acrecentar la injusticia y acabar con los últimos vestigios de la democracia. Si es verdad que la paz se hace entre enemigos, es igualmente cierto que un proceso de pacificación no puede relegar al papel de espectadores a las víctimas, a las fuerzas organizadas sobrevivientes, a las expresiones auténticas del pueblo que, desde siempre, piden diálogo y buscan solución a los problemas reales del país.

Una perspectiva puede ser la alianza entre las aspiraciones de esta sociedad y el cosmopolitismo de las entidades transnacionales que, basa-

6. *El Tiempo*, 25 de septiembre y 21 de diciembre de 2004.

7. *El Tiempo*, 1° de marzo de 2005.

das en los principios de legitimidad, imparcialidad y consenso, operan ya en Colombia. ¿Una perspectiva de paz? No todavía. Esta alianza, por ahora, es sólo una propuesta para organizar elementos de civilización en contra de la barbarie. Una luz que puede ayudar a vislumbrar, no todavía, la luz al final del túnel. Que, personalmente, no veo.